

Santiago, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno.

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**

**PRIMERO:** Que el abogado señor Hernán Triviño Oyarzón en representación de Televisión Nacional de Chile, ambos domiciliados en Bellavista 990, Providencia y apela, conforme al artículo 34 de la Ley N° 18.838 en contra de la Resolución dictada por el Consejo Nacional de Televisión, representado en dicho momento por doña María Catalina Parot Donoso, ambos domiciliados en Mar del Plata N° 2147, Providencia, mediante el Ordinario N° 1300 de 26 de noviembre de 2020, notificado el día 1 de diciembre del mismo año que impuso la sanción de multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales.

Solicita que la sanción sea dejada sin efecto y, en su lugar, no se aplique sanción alguna a la TVN o, en subsidio, sustituir la sanción por amonestación.

Funda su recurso, en primer lugar, en que, durante el proceso sancionatorio, en la cual se les imputó una infracción a los artículos 1° y 12 letras a) y l) de la Ley N° 18.838, al no emitir el mínimo de tiempo establecido en dicha norma de programación cultural, en la quinta semana de abril, lo que fue notificado en plena pandemia por lo que siguiendo las recomendaciones del mismo Consejo Nacional de Televisión se alegó el impedimento respectivo.

Respecto de los cargos que se le imputan, señala que son infundados, en razón de que cumplió en todo momento con el mínimo establecido de exhibición de programación cultural durante el mes de abril.

Además, cualquier omisión en la información sobre programación cultural emitida sólo hace presumir el incumplimiento, por lo que admite prueba en contrario, lo que fue demostrado.

Añade que, solicitó un término probatorio de manera de acreditar tanto el contenido cultural como el impedimento lo que no fue resuelto por el Consejo Nacional de Televisión.

A lo anterior, alega que existen problemas de legalidad del procedimiento y sanción del Consejo apelado, privando del derecho a defensa, lo que funda en que la Ley N° 18.838 y el actuar del Consejo Nacional de Televisión en el procedimiento sancionatorio han sido cuestionados por falta de legalidad y su posible inconstitucionalidad; lo anterior se advierte en el contenido de la sanción aplicada donde se plantea la tesis de *“ilícito administrativo de mera actividad y peligro abstracto”* en



*donde “para que la infracción se entienda consumada y proceda su sanción, no es necesario que se haya producido un daño material concreto al bien jurídico que la normativa protege, sino que basta que se haya desplegado la conducta que supone en peligro dicho bien jurídico, lo que en la especie ocurriría con la sola emisión”.*

De acuerdo a lo anterior, continúa, se hace imposible la defensa de los intereses de los canales de televisión ya que el mismo órgano que prejuzga sanciona.

Agrega que en el procedimiento sancionatorio existen vicios procedimentales graves, privando del derecho a defensa no considerando los descargos realizados, ignorando el impedimento alegado conforme la Ley N° 21.226, sin pronunciarse.

En otro orden de cosas, explica que cumplió cabalmente su obligación legal lo que fue informado en los descargos, el diecisiete de agosto de dos mil veinte, detallando los programas exhibidos, cumpliendo con creces el mínimo legal.

Solicita se analice la falta de discrecionalidad administrativa del Consejo en este tipo de casos, atendida la magnitud del incumplimiento de solamente siete minutos, sosteniendo que el Consejo Nacional de Televisión interpreta en forma errónea haciendo excesiva utilización de sus facultades sancionatorias.

Por último, cuestiona imprecisión en la determinación de la sentencia, sobre una eventual reincidencia, siendo los hechos y circunstancias totalmente distintos por lo que no resulta oficioso una comparación en abstracto, por lo que atendida la insignificancia del incumplimiento sería procedente la amonestación y no la multa.

**SEGUNDO:** Que, al informar la recurrida, solicita el rechazo del recurso. Indica, al efecto, que las argumentaciones de la apelante no resultan idóneas para excluir la responsabilidad de TVN las que deben ser desestimadas, en base a una serie de consideraciones que detalla:

En primer término, en su recurso, TVN no derrumba la presunción de legalidad del acto administrativo dictado por el Consejo. En este sentido, sostiene que el recurso de apelación debe considerarse como recurso de reclamación conforme lo señalado por la jurisprudencia y del contenido del artículo 34 de la Ley N° 18.838 en relación artículo 15 Ley N° 19.880, conforme a lo cual la Corte requiere pronunciarse respecto de la legalidad de los actos administrativos.



En segundo lugar, en cuanto a la privación del derecho a defensa, señala que los descargos se tuvieron por evacuados en rebeldía, al formularse extemporáneamente, conforme artículo 34 de la Ley N° 18.838, puesto que la notificación practicada conforme artículo 27 inciso 7° Ley N° 18.838, el derecho precluyó el tres de agosto de dos mil veinte.

Sostiene, además, que el Consejo Nacional de Televisión como órgano constitucional autónomo no forma parte del Poder Judicial, por lo que no le es aplicable la Ley N° 21.226. Sin perjuicio de lo cual, en los descargos tampoco se daban argumentos que justificaran el incumplimiento.

Respecto del supuesto cumplimiento de la obligación, TVN no entrega ningún argumento válido que justifique dicha alegación, por cuanto el incumplimiento decía relación con la transmisión en horario de alta audiencia, conforme el artículo 12 de la Ley N° 18.838 en relación artículo 7° de la misma ley. Agrega que, la concesionaria trató de acreditar el cumplimiento, refiriendo diversos programas -todos transmitidos la primera semana de abril-, y no aquella por la cual se aplicó la sanción. Añadió que TVN tampoco informó los programas que entendía por culturales.

Finalmente, en cuanto a la proporcionalidad de la sanción, expresa que también ha sido resguardado, que la Ley N° 18.838 contempla un catálogo taxativo de sanciones y el Consejo Nacional de Televisión está facultado, por el artículo 33 de la legislación aplicable, para imponer las sanciones establecidas en relación a la gravedad de la infracción; por su lado el artículo 12 letra l) dispone expresamente que el incumplimiento será sancionado con multa por lo que no procede aplicar una sanción menor; por último conforme artículo 33 N° 2, en caso de reincidencia, se podrá duplicar la sanción, lo que demuestra la objetividad del actuar del Consejo.

**TERCERO:** Que, el inciso segundo del artículo 34 de la Ley N° 18.838 dispone que *“la resolución que imponga amonestación, multa o suspensión de transmisiones será apelable ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y la resolución que declare la caducidad de una concesión será apelable ante la Corte Suprema. La apelación deberá interponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución, ser fundada, y para su agregación a la tabla, vista y fallo se registrará por las reglas aplicables al recurso de protección”*.

No obstante, lo señalado precedentemente, la naturaleza del arbitrio incoado es de un recurso de reclamación, dado que la resolución recurrida corresponde a un acto administrativo. Así lo ha expresado la Corte

XXXXKEDTJN

Suprema en sentencia de 12 de noviembre de 2018, Rol N° 15.369-2018, en que se sostuvo que:

*“Octavo: Que, previo al examen del recurso interpuesto, es necesario consignar que el artículo 23 inciso 5° de la Ley N° 18.838, que ha dado origen a este proceso, al igual que el artículo 11 inciso 3° de la Ley N° 20.378, denominan apelación al reclamo de ilegalidad jurisdiccional, que procede en contra de las resoluciones que se pronuncian respecto de las reclamaciones administrativas dictadas en los procedimientos que los respectivos textos establecen. De este modo y tal como lo ha señalado esta Corte en otras oportunidades (por ejemplo, SCS Rol N° 6.750-2012, sentencia de 12 de marzo de 2013), “la competencia del tribunal viene dada por la naturaleza del recurso de reclamación, en tanto control de legalidad”, de manera que para modificar la resolución dictada por la autoridad reguladora competente, es “dar por establecida la ilegalidad, invalidar el acto administrativo y disponer la decisión adecuada al caso, si procediere, conforme a los límites de su competencia en un reclamo de ilegalidad” (SCS Rol N° 21.814-2017, sentencia de fecha 25 de octubre de 2017)*

*Noveno: Que, en las condiciones expuestas, resultaba improcedente rebajar la multa impuesta, toda vez que la competencia de la Corte en esta materia se vincula con la determinación de la legalidad o ilegalidad del acto administrativo que impone la sanción. En consecuencia, si los sentenciadores consideran que la resolución que impone la sanción es legal, carecen de atribuciones para disminuirla.*

*Décimo: Que los argumentos esgrimidos por la recurrente dicen relación con el error en que esta misma parte ha incurrido al deducir el reclamo de ilegalidad entendiéndolo como un recurso de apelación, atendiendo únicamente al nomen iuris y no a la naturaleza de la acción, como se ha explicado en los razonamientos que preceden, esto es, referidos a la valoración de la prueba rendida para dar por establecidos los hechos y a la apreciación de la misma, pero sin invocar vicios relativos a la legalidad de la resolución imputada, lo que no guarda relación con la competencia que la ley entrega al tribunal que debe resolver el arbitrio intentado, de modo que mal podían ser acogidos por los jueces del grado, como pretendía la reclamante”.*

**CUARTO:** Que en la misma línea del razonamiento que precede, resulta pertinente indicar que el recurso que contempla el artículo 34 de la



Ley N° 18.838 no es para que esta Corte se pronuncie como superior jerárquico del Consejo Nacional de Televisión -dado que reviste la calidad de órgano de la administración y no tiene el carácter de un Tribunal de la República, de conformidad con lo previsto en los artículos 5 del Código Orgánico de Tribunales y 77 de la Constitución Política de la República-, sino como un ejercicio de la potestad con que cuentan los tribunales para revisar la legalidad de los actos administrativos, en virtud del principio de impugnabilidad, previsto en el artículo 15 de la Ley N° 19.880.

En efecto, corresponde analizar, si el Consejo Nacional de Televisión ha actuado dentro del marco regulatorio que le fijan la Constitución y la Ley, respetando las normas del debido proceso y si por su parte, la decisión se encuentra razonablemente fundada y ajustada a derecho, todo ello teniendo en consideración que los actos administrativos gozan de la presunción de legalidad, correspondiendo por tanto a la recurrente desvirtuarla.

**QUINTO:** Que resultan ser hechos no controvertidos por las partes los siguientes que:

- a) El H. Consejo Nacional de Televisión, en su sesión de 22 de junio de 2020, formuló cargo a Televisión Nacional de Chile, por presuntamente infringir el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, por la vía de la vulneración del artículo 6° en relación al artículo 7° de las Normas sobre Transmisión de Programas Culturales, por no transmitir, en los horarios legalmente establecidos, el mínimo legal de programación cultural, durante la quinta semana del mes de abril de 2020.
- b) En la sesión del día 16 de noviembre de 2020 –y habiéndose tenido los descargos de la concesionaria, por evacuados en su rebeldía-, el Consejo Nacional de Televisión acordó imponer a TVN la mínima sanción de multa de 20 (veinte) Unidades Tributarias Mensuales, contemplada en el artículo 33 N° 2 de la Ley 18.838, por incurrir en la hipótesis infraccional descrita, en el período señalado. Lo anterior, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 12 letra l) inciso 5° de la Ley 18.838.
- c) Contra dicho acuerdo, la concesionaria ha interpuesto el presente recurso de reclamación.

**SEXTO:** De esta forma, a continuación, se analizará la supuesta normativa infringida y consecuentemente con ello, si el acto administrativo impugnado se ajusta a ella.



En primer término, es dable indicar que, la Constitución Política de la República, en el numeral 12 del artículo 19, reconoce a todas las personas la libertad de emitir opiniones e informar, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio del régimen de responsabilidades y sanciones que admite la ley, la que deberá ser siempre de quórum calificado. Tratándose de la actividad televisiva, la Constitución Política ha establecido que habrá un Consejo Nacional de Televisión, cuya tarea será velar por el correcto funcionamiento de los servicios de esa clase.

Es necesario advertir, en este punto, que la única actividad informativa y de opinión que la Carta Fundamental ha estimado necesario reglamentar, haciendo alusión a un estándar de comportamiento en sus contenidos, es la televisiva, lo que a su turno justifica la adopción de un estatuto jurídico especial, diferente al propio de los demás medios de comunicación.

En relación a la actividad televisiva -a diferencia de los demás medios de comunicación- nuestra Carta Fundamental consagra la existencia del Consejo Nacional de Televisión, cuya tarea será velar y controlar el funcionamiento de los servicios de esta índole, mediante la supervigilancia y fiscalización del contenido de las emisiones que por medio de ellos se efectúan, materializado en la dictación de la Ley N° 18.838.

Asimismo, el artículo 19 N° 21 de nuestra Carta Fundamental obliga a que en el ejercicio de desarrollar cualquier actividad económica se deben siempre respetar las normas legales que regulen dicha actividad.

**SÉPTIMO:** Que en este orden de ideas, el artículo 1° de la Ley N° 18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión, en su inciso 4 ° dispone que *“Se entenderá por **correcto funcionamiento** de estos servicios **el permanente respeto**, a través de su programación, de la democracia, la paz, el pluralismo, el desarrollo regional, el medio ambiente, la familia, la **formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud**, los pueblos originarios, la dignidad humana y su expresión en la igualdad de derechos y trato entre hombres y mujeres, así como el de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”*.

De igual forma, en la Ley 18.838 se establece la obligación para todos los servicios de televisión, relativa a transmitir programas de índole cultural. En armonía con el artículo 1°, inciso final de esa Ley, esta obligación se considera como parte del principio constitucional del correcto



funcionamiento de los servicios de televisión. En concreto, el artículo 12º, letra l) de la ley en comento, dispone que el Consejo deberá establecer -vía reglamento- que los concesionarios deberán transmitir a lo menos cuatro horas de programas culturales a la semana, entendiendo por tales aquellos referidos a los valores que emanen de las identidades multiculturales existentes en el país, los relativos a la formación cívica de las personas, los destinados al fortalecimiento de las identidades nacionales, regionales o locales y aquellos destinados a promover el patrimonio universal y, en particular, el patrimonio nacional. De acuerdo a esa norma, dos de las cuatro horas deberán transmitirse en horarios de alta audiencia fijados por el Consejo -quedando a criterio de los canales determinar el día y hora dentro de dichos horarios-, y el equivalente en tiempo de las restantes dos horas, fijado también por el Consejo, podrá transmitirse en otros horarios.

Así, el CNTV, haciendo uso de sus potestades constitucionales y legales, dictó el reglamento que rige esta obligación, cuyos numerales 6º, 7º y 8º disponen, respectivamente, lo siguiente:

*“6º: Al menos dos de las cuatro horas de programación cultural deberán transmitirse en horario de alta audiencia, que se fijan en este reglamento, quedando a criterio de cada servicio de televisión determinar el día y la hora dentro de dichos horarios;*

*7º: De lunes a domingo, ambos días inclusive, el horario de alta audiencia será el comprendido entre las 18:30 horas y las 00:00 horas;*

*8º: De lunes a domingo, ambos días inclusive, las restantes horas obligatorias de programación cultural deberán transmitirse entre las 9:00 Horas y las 18:30 Horas”.*

En este marco, el artículo 9º, del mismo Reglamento, dispone que, para ser considerados en la medición respectiva como válidamente transmitidos en el marco cultural, la programación de que se trata deberá ser transmitida íntegramente en los horarios antes aludidos. Luego, a modo de contextualización para precisar el cumplimiento de la obligación, refiere que debe tomarse en cuenta que nos encontramos en presencia de una obligación cuyo cumplimiento depende activa y exclusivamente de los canales de televisión -sean permisionarios o concesionarios. Por lo tanto, y en armonía con el núcleo legal de la obligación, el artículo 14º de ese cuerpo reglamentario exige que los representantes legales de los canales, informen al CNTV la programación cultural emitida, a más tardar el quinto día hábil del período siguiente al fiscalizado.



**OCTAVO:** De esta forma, la recurrida verificó que Televisión Nacional de Chile, incumplió su obligación legal durante el periodo abril de 2020, bajo las siguientes hipótesis fácticas, explicitadas en la formulación de cargos, y corroboradas en la sanción, luego de haber sido tenidos los descargos de la concesionaria por evacuados en rebeldía, a saber: Por no transmitir en el horario de alta audiencia el mínimo legal de tiempo exigido por la ley, en la quinta semana del periodo abril de 2020. Lo anterior, dado que el único programa informado por la concesionaria -en el periodo referido- no cumple con el minutaje mínimo exigido por la normativa cultural.

Al respecto la recurrida precisó que TVN informó al CNTV, dentro de plazo, su programación cultural emitida en la quinta semana del periodo abril de 2020, dando cuenta de un programa que ella estima como cultural a emitir en el horario establecido en el artículo 6° en relación al artículo 7° de las Normas sobre la Transmisión de Programas Culturales (en horario de alta audiencia), y que es el siguiente: durante la quinta semana (lunes 27 de abril al domingo 03 de mayo de 2020): El día 03 de mayo, el programa “Estado Nacional” de 113 minutos, que fue aceptado sólo en cuanto a los minutos efectiva e íntegramente transmitidos en el bloque horario de alta audiencia, según consta en el Informe Cultural abril-2020 del CNTV. De esta manera, la programación informada durante la quinta semana del período fiscalizado, en horario que es de alta audiencia y que fue aceptada por el CNTV, son 113 minutos y, por tanto, insuficiente de acuerdo a lo dispuesto en la normativa pertinente.

A raíz de lo anterior, el CNTV formuló cargos a la concesionaria por infringir el artículo 1° de la Ley 18.838, por la vía de la vulneración del artículo 6° en relación al artículo 7° de las Normas sobre Transmisión de Programas Culturales, por no transmitir, en los horarios legalmente establecidos, el mínimo legal de programación cultural, durante la quinta semana del mes de abril de 2020.

**NOVENO:** En efecto, en el considerando octavo del Acuerdo Sancionatorio, notificado a la concesionaria a través del Ord. N° 1300, de 26 de noviembre de 2020, expresa claramente los fundamentos de hecho que dan cuenta del incumplimiento de la normativa, que constituye la conducta infraccional de TVN: *“OCTAVO: Que, de conformidad a lo indicado en el informe tenido a la vista, la concesionaria Televisión Nacional de Chile (TVN), no emitió el mínimo legal de programación*





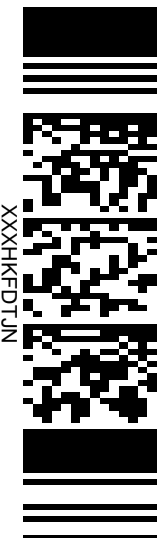
*cultural en la franja horaria establecida en el artículo 6° en relación al artículo 7° de las Normas sobre la Transmisión de Programas Culturales, durante la quinta semana del período abril de 2020, en razón de que el programa “Estado Nacional ”, emitido el día domingo 03 de mayo, reportó un total de 113 minutos, los que no resultaron suficientes para satisfacer el minutaje mínimo semanal de programación cultural en horario de alta audiencia exigido por la normativa cultural”.*

**DÉCIMO:** Que a fin de respetar el debido proceso y a vía de analizar el respeto a los principios de imparcialidad, razonabilidad, transparencia y publicidad -artículos 11, 16 y 41 de la Ley N° 19.880- corresponde indicar en primer término que, en la decisión recurrida se expusieron los hechos que se acreditaron, los que fueron expuestos en la motivación que precede.

En ese contexto, la recurrida arribó a la conclusión que, la recurrente había incurrido en una conducta contraria al correcto funcionamiento de los servicios de televisión, por cuanto, de conformidad a lo indicado en el Informe de Cumplimiento Normativa Cultural, correspondiente al periodo abril-2020, elaborado por el Departamento de Fiscalización y Supervisión del CNTV, y luego de ser analizados todos los antecedentes en la Sesión de fecha 16 de noviembre de 2020, fue posible afirmar que Televisión Nacional de Chile no emitió el mínimo legal de programación cultural en el horario establecido en el artículo 6° en relación al artículo 7° de las Normas sobre la Transmisión de Programas Culturales, durante la quinta semana del período abril de 2020.

**UNDÉCIMO:** De esta forma, en virtud del análisis de los escasos antecedentes aportados por TVN durante todo el procedimiento fiscalizatorio, no fue posible concluir que, en el caso de autos, se haya acreditado el cumplimiento a lo establecido en los numerales 1° y 6° de las Normas sobre la Trasmisión de Programas Culturales, en tanto la concesionaria presentó sus descargos fuera de plazo, por lo que, al ser tenidos éstos por evacuados en rebeldía, el CNTV no tuvo en consideración los argumentos planteados por TVN, imponiéndole en definitiva la mínima sanción de multa ascendiente a 20 UTM, en la Sesión de 16 de noviembre de 2020.

De esta manera, es dable colegir que la concesionaria no logró desvirtuar los antecedentes fácticos tenidos en consideración para sancionarla, razón por la cual queda en pie la presunción de legalidad



implícita, tanto en la formulación de cargos -basada en su asidero técnico, Informe de fiscalización respectivo-, como en la sanción, en armonía con lo dispuesto en el inciso final del artículo 3° de la Ley 19.880, que permite, salvo antecedentes que revistan la suficiente gravedad, llevar a cabo la ejecución de los mismos.

**DUODÉCIMO:** Que, en la especie se verificó que se infringió el artículo 33 de la Ley N° 19.733, el que en su parte final dispone *“La infracción a este artículo será sancionada con multa de treinta a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales. En caso de reiteración, la multa se elevará al doble.”*.

En efecto, para los efectos de ponderar el monto de la sanción tuvo en consideración la gravedad de la infracción, el bien jurídico vulnerado, el alcance nacional de la concesionaria y el hecho de que fuera reincidente en la infracción.

En este contexto, se debe precisar que la literalidad del núcleo legal de la conducta sancionada - artículo 12°, letra l) de la Ley 18.838-, dispone expresamente que el incumplimiento de esta obligación será sancionado con una multa, razón por la que resulta completamente improcedente imponer una de menor entidad a la concesionaria. De igual manera, el citado artículo 33°, en su numeral 2 precisa: *«En caso de reincidencia en una misma infracción, se podrá duplicar el máximo de la multa»*, pero a pesar de ello el CNTV impuso la multa mínima de conformidad a la ley, es decir, 20 UTM, no obstante la concesionaria cuenta -según da cuenta el informe de descargos evacuado por el Departamento de Fiscalización y Supervisión del CNTV- con cuatro sanciones previas por no respetar el correcto funcionamiento de los servicios de televisión en los 12 meses anteriores al periodo fiscalizado, por infracción a las Normas sobre la Transmisión de Programas Culturales.

**DECIMOTERCERO:** Por lo demás, la respectiva sanción se encuentra debidamente fundada y fue dictada dentro del marco de las competencias que la legislación le confiere al Consejo Nacional de Televisión, conforme al principio de proporcionalidad, según lo dispone la Ley N° 18.838, el que es manifestación del principio de legalidad constitucional -artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República-, como, asimismo, en el artículo 2° de la Ley N° 18.575 -Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado-,



apegado a la ley con respeto del debido proceso y del derecho de defensa de la concesionaria.

Asimismo, de acuerdo a los antecedentes vertidos en el recurso no se aportan elementos de convicción que acrediten la existencia de vicios invalidatorios del Acuerdo del Consejo, sino que de su análisis es dable concluir que se limita a plantear una distinta interpretación jurídica del derecho, los que no resultaron idóneos para derribar el acto administrativo que viene en reclamar.

**DECIMOCUARTO:** En consecuencia, la sanción de 20 UTM (veinte unidades tributarias mensuales) que se le impuso a la concesionaria, atendida la gravedad y circunstancias del hecho que se estimaron concurrentes sería plenamente proporcionada y ajustada a derecho.

En efecto, de acuerdo a lo que se viene razonando, aunado a lo que disponen los artículos 1 y 33 de la Ley N° 18.838, artículo 33 de la Ley N° 19.733 y artículo 8 de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión, es posible sostener que se ajusta a derecho la decisión del Consejo Nacional de Televisión, adoptada mediante la resolución que impuso una multa de 20 UTM a Televisión Nacional de Chile mediante Ordinario N° 1300/2020 de 26 de noviembre de 2020.

En consecuencia, ninguna de las alegaciones formuladas por la recurrente alteran el hecho de que efectivamente no se realizó una transmisión que infringió el principio del correcto funcionamiento de los servicios de televisión.

Con lo razonado, citas legales mencionadas, artículos 1, 15, 33 y 34 de la Ley N° 18.838 y artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve que:

Por las razones mencionadas, y según lo previsto en las disposiciones constitucionales y legales que se han citado, **se rechaza** la reclamación interpuesta por don Hernán Triviño Oyarzón en representación de Televisión Nacional de Chile, en representación de Televisión Nacional de Chile, en contra de la resolución del H. Consejo Nacional de Televisión (CNTV) que impuso una multa de 20 UTM mediante Ordinario N° 1300 de 26 de noviembre de 2020, **con costas**.

Acordado con el voto en contra del ministro señor Mera, quien estuvo por acoger el reclamo en su integridad y dejar sin efecto la sanción aplicada. Tuvo presente para ello:

XXXXKEDTJN



I.- Que se imputa a TVN el no haber emitido el mínimo de tiempo de programación cultural a que se refieren las disposiciones legales y reglamentarias que indica el CNTV. Específicamente que en la quinta semana de abril de 2020 sólo habría dado programas de esta naturaleza por ciento trece días y no por ciento veinte minutos, como era su deber, esto es, echó en falta siete minutos de “cultura” para el solaz de los televidentes.

II.- Que TVN ha argüido que ha cumplido con la normativa y que determinada programación transmitida sí tiene el carácter de cultural, mas el CNTV no abrió un término probatorio para que la concesionaria tuviera derecho a probar sus asertos, lo que ciertamente importa una arbitrariedad de la Administración y que torna el procedimiento en ilícito. Y tal derecho a probar existe aún si se entiende que TVN presentó sus descargos en forma extemporánea.

III.- Que, sea como fuere, la arbitraria decisión del CNTV en cuanto a sancionar a TVN con una multa de 20 UTM, esto es, a esta fecha, \$1.044.260, por transmitir ciento trece de ciento veinte minutos de “programación cultural”, parece un despropósito pues no se advierte cómo se ha podido vulnerar el bien jurídico protegido por la norma del inciso primero de la letra l) del artículo 12 de la ley 18.838 con una omisión de esta naturaleza, desde que no cabe duda que el programa denominado “Estado Nacional” -transmitido la quinta semana de abril de 2020, al que el CNTV califica de “cultural”-, constituye una unidad programática cultural que duró prácticamente las dos horas que exige la Administración, sin que los siete minutos que se echan en falta tengan ninguna relevancia para imputarle a TVN una falta a la disposición legal recién citada.

IV.- Que, luego, el no abrir un término probatorio y castigar con una multa de más de un millón de pesos por siete minutos de omisión en la entrega de contenidos “culturales”, sea lo que fuere lo que el CNTV entiende por tal, cuando la propia Administración reconoce que se emitió un programa “cultural” de prácticamente dos horas de duración, constituye una arbitrariedad que debe ser reparada por la judicatura.

Acordada desechada que fuera la indicación previa del ministro señor Mera de tratar el recurso del reclamante como uno de apelación y no de legalidad, por cuanto el inciso segundo del artículo 34 de la ley 18.838 señala expresamente que “La resolución que imponga amonestación, multa o suspensión de transmisiones será apelable ante la Corte de Apelaciones de Santiago”, es decir, hay norma expresa que dice que se trata de un



recurso de apelación y, por tanto, no hay “reclamación”, hay “apelación”, y por la muy simple razón de que la ley así lo dice, ley expresa, que se debe aplicar porque es obligación de la judicatura hacerlo y porque incluso es un delito no hacerlo (artículo 223 N° 1° del Código Penal), entendiendo que la causa en cuestión es una “civil”. No puede quedar al arbitrio de los jueces decidir la naturaleza de un recurso cuando ha sido el legislador el que ha resuelto el asunto de una manera tan clara.

**Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.**

**Redacción de la Ministro señora Verónica Sabaj Escudero y del voto su autor.**

**Contencioso Administrativo N° 758-2020**

Pronunciada por la Tercera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz, conformada por la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero y el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández.



Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M., Veronica Cecilia Sabaj E. y Abogado Integrante Jorge Norambuena H. Santiago, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno.

En Santiago, a diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

